



Las elecciones municipales en Perú y el gobierno de Alan García

Author(s): Jorge Nieto Montesinos

Source: *Estudios Sociológicos*, Vol. 5, No. 14 (May - Aug., 1987), pp. 385-396

Published by: [El Colegio De Mexico](#)

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/40419932>

Accessed: 22/06/2014 01:56

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
<http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.



El Colegio De Mexico is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Estudios Sociológicos*.

<http://www.jstor.org>

Coyuntura

Las elecciones municipales en Perú y el gobierno de Alan García

Jorge Nieto Montesinos

EL 9 DE NOVIEMBRE DE 1986 los peruanos acudieron a las urnas por sexta vez en ocho años: una elección fue para conformar la Asamblea Constituyente, dos para nominar Presidente y Congreso nacionales y tres para designar alcaldes y concejos municipales. Todo ello, además, en un contexto de violencia política interna en la forma de terrorismo urbano y guerrilla rural, desde que Sendero Luminoso —seguido luego por otros grupos— inició, en mayo de 1980, una guerra cuyo doloroso saldo se acerca ya a las 10 000 vidas humanas.

Si es cierto que las mortandades militares son uno de los fenómenos que generan un estado de vaciamiento o disponibilidad ideológicas en los conglomerados humanos que las sufren y que la reiteración de los actos democráticos conforma por sí misma un proceso sucesivo de constitución, entonces tenemos que Perú atraviesa por un momento excepcional de su historia¹ en el cual no sólo coexisten el espacio de la política y el de la guerra, cuya simultaneidad configura el escenario nacional de relación de fuerzas sociales y políticas, sino también, si se cala hondo, se observará la existencia de vastos sectores de la población dispuestos a cambiar sus creencias tradicionales —cambio cuyo sentido no está predeterminado— junto con interpelaciones ideopolíticas que, de derecha a izquierda, buscan cimentar hegemonías de largo plazo en el Estado. Intentaré, pues, una lectura de las elecciones municipales de noviembre último que acaso orille estos problemas.

¹ René Zavaleta Mercado, “Elementos para el análisis del Estado en América Latina” (mimeo.), México, FLACSO, 1980.

Escena electoral y violencia política

Ya la propia realización de los comicios municipales y la campaña electoral que los precedió fue una imposición del espacio de la política sobre el de la guerra. Ocurre en Perú como si el clásico movimiento pendular que la sociología política detectó en su historia, de los regímenes demoliberales a las dictaduras militares, hubiera sido remplazado por la simultaneidad de los espacios de la política y de la guerra en pugna por imponerse como el escenario definitivo en el que deberán resolverse los conflictos sociales.

Aunque por sí sola la fuerza política y militar de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru no llegue ni de lejos a poner en duda la institucionalidad del Estado vigente, los atentados selectivos contra los altos mandos militares y las autoridades civiles de los llamados "comandos de aniquilamiento" azuzan siempre el fantasma de un golpe de estado. La opinión conservadora, que vive la actual situación de violencia como un reclamo histórico contra el modo en que tradicionalmente gobernó al país, no sabe más que exigir la más cruenta de las respuestas al terrorismo de izquierda, acaso intentando borrar las razones de sus culpas. Los primeros meses del año pasado habían conocido el recrudecimiento de la violencia terrorista, cuya manifestación más grave fue el asesinato del almirante Ponce Canessa, al parecer jefe de inteligencia de la Marina de Guerra. Las Fuerzas Armadas en conjunto fueron sacudidas por tan certero golpe. Los ecos de las voces que exigían una mayor represión contra el senderismo no se habían acallado aún cuando ocurrió la toma de los penales por inculpados de terrorismo. La bárbara respuesta del gobierno por medio de las fuerzas de la Marina de Guerra, la Guardia Republicana y el Ejército, que asesinaron a mansalva a decenas de reos inermes y rendidos, pareció más el ejercicio de una acción punitiva y de venganza que el restablecimiento del orden constitucional. Las protestas del presidente Alan García Pérez ante las evidencias de un hecho que conmocionó a la opinión pública no fueron suficientes para someter a la justicia —ni civil ni militar— a los autores de lo que la propia primera autoridad del Estado, el Presidente, designó como asesinato sin atenuantes. En medio de interpelaciones parlamentarias al gabinete, exigencias de comisiones investigadoras, pugnas sordas entre el Poder Ejecutivo y

los comandos militares, y una polarización abierta de la opinión en donde se afirmaba una creciente “conservadurización” de los sectores medios y altos, las elecciones municipales fueron convocadas y paulatinamente se dio paso a la escena electoral. Aunque ésta fue afirmándose conforme se acercaba la fecha de su realización, la afirmación del escenario de la política sobre el de la guerra no fue pleno. Las campañas electorales de las distintas fuerzas políticas, caracterizadas hasta ahora por el recurso a la manifestación ciudadana en la plaza pública, se vieron trastocadas: ante el temor de que se atentara contra la vida de los candidatos a los más de mil municipios del país, las fuerzas partidarias desarrollaron su propaganda sobre todo por los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, lo que otorgaba obvia ventaja a los de mayores recursos económicos, pero más importante aún, restringía la libertad de expresión pública de vastos y mayoritarios sectores de la población. Así, el terrorismo y la guerra sucia que le responde se combinaron —sin quererlo— contra la movilización política ciudadana.

La campaña electoral

En su libro ya clásico,² Christopher Hill dice que “. . . casi por definición, una gran revolución no puede surgir sin ideas. Para estar dispuestos a matar o a dejarse matar, la mayoría de los hombres necesitan creer intensamente en un ideal”. Si tal cosa es válida para la convulsión revolucionaria, el hecho social por excelencia de la época moderna, vale también para la pugna electoral. Nadie puede convencer a un electorado si es que, como fuerza política, no tiene la propia convicción de su valer. Y aunque en una campaña electoral no se trate de matar o dejarse matar,³ la manera en que las diversas fuerzas partidarias asumieron sus propias estrategias para los comicios revela mucho del grado de perspicacia, convicción y homogeneidad acerca de sus propios objetivos en la vida política nacional. Esta mayor o menor certeza de sí mismos fue transmitida al electorado. Mientras la derecha,

² Christopher Hill, *Los orígenes intelectuales de la revolución inglesa*, Barcelona, Grijalbo, 1980.

³ Sin embargo, muchos de los candidatos corrieron el riesgo de ser asesinados por el terrorismo de Sendero Luminoso, y hubo un caso, Huancayo, donde el atentado consumado contra un candidato del APRA le dio la victoria electoral a este partido a última hora: macabro beneficio político gracias a la mano negra del senderismo.

representada por el Partido Popular Cristiano (PPC), demostaba que sabía más por vieja que por diabla y planeaba una inteligente campaña que cubría los más mínimos detalles y el APRA dosificaba bien las distintas fases de su estrategia electoral, de acuerdo con el hábil juego de alianzas y presiones que conducía Alan García, la izquierda, que en el papel era la que tenía mayores posibilidades de obtener la victoria, cuando menos en Lima, la capital, no lograba traducir en su campaña sino su desconcierto y su crisis interna.

El discurso político del PPC produjo una interpelación liberal y conservadora para el gran público, más liberal que conservadora. A lo largo de su campaña el PPC prefirió evitar todo debate político, mostrando, y logrando en gran medida, que la elección municipal fuera asumida por sus opositores, hasta el tramo final, como un problema básicamente técnico y de eficiencia administrativa. Pero cuando con gran cautela levantó críticas al gobierno, lo hizo enarbolando los temas clásicos del liberalismo, aludiendo a la tentación aprista de ejercer un monopolio unipartidario del Estado. Intentaba así movilizar el fuerte sentimiento antiaprista, de raíz básicamente oligárquica, que yace latente en buena parte de los sectores medios, y en algunos populares condicidos por la izquierda, aunque en estos casos el antiaprismo tenga también otras razones.

Las palabras, los gestos, los discursos, las consignas, las imágenes, todo repetía machaconamente la excelencia técnica de los candidatos pepecistas, al tiempo que tenían, precisamente por su "saber", la fuerza suficiente para oponerse al avasallamiento del poder central. Esa fuerza, sin embargo, era mesurada y tranquila, no fuera que se recordara la imagen del gerente autoritario, partidario de Pinochet, que su líder máximo, Luis Bedoya, ahora candidato a la alcaldía limeña, cultivó con esmero. Si al final los resultados obtenidos por el PPC fueron magros, y cada voto obtenido le costó 10 o 50 veces lo que a las otras fuerzas políticas, fue porque se le hizo imposible remontar las barreras étnicas y culturales que lo distanciaban de la gran masa popular: los cholos e indígenas de Perú han visto de siempre con desconfianza a la minoría blanca —ayer conquistadora, hoy transnacional— sólo que ahora tienen la posibilidad de expresarlo con impunidad por medio de un voto cuyo sentido todavía es, por eso, más social que político.

La Izquierda Unida (UI), en cambio, en grave crisis de iden-

tidad, atravesada por una severa lucha interna entre radicales y moderados, sólo al final encontró, débilmente, un discurso que puede definirse como pluralista por el cambio. A pesar de poder exhibir una buena gestión municipal, a la vez eficiente y con sentido social —producto en buena medida de la capacidad intelectual y técnica que acumula por haber ganado en los setenta a la mayoría de la inteligencia peruana—, los dos sectores políticos en pugna por la conducción del frente izquierdista usaron la campaña municipal como terreno para definir sus diferencias internas. No hubo intervención de sus principales candidatos en la que no hicieran alusiones no muy veladas a las divisiones intestinas. En lo que se refiere a la conducción central de la campaña, en manos de los moderados, antes de encontrar el motivo final de su propaganda electoral se movió erráticamente entre una “no campaña”, que presumía una victoria indiscutible, y la búsqueda, en el caso de Lima, del retiro del candidato aprista en favor de la IU, para recalcar tardíamente en la oposición el gobierno aprista desde una perspectiva pluralista, que proponía al municipio como un espacio de fiscalización y control del gobierno y la mayoría parlamentaria apristas.

El APRA, por su parte, definió una interpelación autoritaria por el cambio. Su campaña nacional la centró en la figura del presidente Alan García, en la promoción de los logros de su gobierno, en la utilización del conflicto nacional con el FMI, y, sobre todo, en el razonamiento de que podrían esperarse mayores obras de los municipios si éstos actuaban también bajo los auspicios del partido en el gobierno. El “juntos” de su eslogan principal, a la vez que remitía a un cierto sentimiento de unidad nacional, quería referirse a los aspectos más regresivos de una sociedad civil que, frente al Estado y sus favores, descarta cualquier impulso autodeterminativo. Por ello el APRA no vaciló en utilizar todos los recursos del Estado para promocionar a sus candidatos, recurriendo a los manidos mecanismos de la mediación prebendal. Reforzaba de esta manera los aspectos más autoritarios de la cultura política peruana, aunque ahora para sostener el renovado discurso aprista por el cambio social y la afirmación nacional del Estado.

Así pues, cada una de las fuerzas políticas contendientes en la campaña electoral exhibió no sólo su fuerza, sino también sus debilidades. Y más allá de sus propuestas específicas en torno al problema de la administración municipal de las ciudades, ape-

laban a diversos motivos de la cultura política peruana, reforzando los aspectos de autoritarismo, de individualismo antiestatal e incluso de autodeterminación de las masas.

Los resultados electorales

Los resultados de la votación del 9 de noviembre pueden ser considerados en sí mismos. Sin embargo es preferible compararlos con elecciones anteriores para observar el desplazamiento y, si fuera el caso, la alteración sustantiva de una determinada relación de fuerzas. Algunos analistas han preferido establecer esta comparación con las cifras de una votación municipal anterior, la de 1983, pues argumentan que se trata de las únicas homologables. Me parece, en cambio, que aunque las elecciones más cercanas, las de 1985, fueron para elegir Presidente y Congreso nacionales, en ellas se estableció una nueva disposición de las fuerzas políticas, al resolverse en favor del APRA la disputa con la Izquierda Unida por encabezar la oposición al gobierno conservador de entonces. Es que el problema que debe responderse en el análisis de los resultados electorales de noviembre consiste en saber cuánto y de que manera varió, si lo hizo, esa disposición de fuerzas previa.

Según esto, la amplia victoria electoral del APRA en las elecciones municipales de noviembre último ratifica en lo esencial la existencia de una amplia mayoría en favor del cambio, cuyo epicentro sigue siendo una coalición tácita, más social que política, de centro-izquierda. Un 70% de la población peruana ha vuelto a ratificar su voluntad por el cambio al votar mayoritariamente por las dos fuerzas que hacen de este propósito, con los énfasis respectivos, el motivo central de sus discursos: el APRA y la IU. Poco importa la capacidad de estos cuerpos políticos para llevar a cabo tales propósitos; la corriente mayoritaria de opinión sigue marchando en esa dirección, la de un cambio social vigorosamente definido.

Ahora bien, aunque el gobernante partido aprista ha ganado la mayoría de los gobiernos municipales del país, sus porcentajes electorales sufrieron una significativa merma. Si en junio de 1985 obtuvo el 53% de la votación nacional válida, ahora logró sólo el 41% de la misma. En poco más de un año se ha producido un desgaste político importante.

Ocurre lo contrario con la IU. Si bien perdió buena parte de los municipios bajo su control, especialmente el de Lima, y algunos de la sierra sur andina, su votación nacional en relación con la de 1985 se elevó en un 7%, al pasar del 25% al 32% del electorado. Pero en el caso de la votación de la izquierda es preciso tener en cuenta que se trata de una elección municipal, pues para la población media el acceso de la izquierda a la gestión municipal no lleva al sistema político a un *impasse*, cosa que sí resultaría de su acceso al gobierno nacional, dadas las resistencias existentes en las Fuerzas Armadas. El PPC, por su parte, avanzó de un 12% a un 17% nacional, aunque en este avance deba considerarse la circunstancia de que el otro gran partido de la derecha, Acción Popular, se haya abstenido de participar en estas elecciones, debido a un proceso de reorganización interna como resultado de su debacle electoral en las elecciones presidenciales de 1985. Si se añade el hecho de que la mayor votación electoral del PPC la obtiene en Lima, donde llega a un 26% de la votación, se observa que ratifica su condición de partido básicamente limeño, sin mayor inserción nacional.

Ahora bien, si se analizan más detenidamente los resultados en Lima, se observan algunos hechos interesantes. La IU, por ejemplo, obtiene sus más altos porcentajes de votación en cuatro distritos: Independencia, Villa El Salvador, Ate y Comas, todos ellos zonas de asentamiento obreras y populares, expresándose de esta manera una tendencia a la identificación entre sectores pobres e izquierda.

<i>Distrito</i>	<i>IU (%)</i>	<i>APRA (%)</i>	<i>PPC (%)</i>
Independencia	1.5	35.2	5.2
Villa El Salvador	49.7	38.9	3.6
Ate	43.6	39.6	8.7
Comas	42.7	41.5	7.7

A esta identificación "clasista" de la votación de la IU debe agregarse, también, la evidencia de la bajísima votación del PPC, de derecha, que en todos los casos no llega a obtener ni el 10% de la votación válida en los distritos populares.

Si se observa, a su vez, aquellos distritos donde el PPC obtiene sus más altos porcentajes de votación, se verá que todos ellos son los que la sociología peruana considera como barrios residenciales, allí donde viven los sectores medios y altos.

Distrito	PPC (%)	APRA (%)	IU (%)
San Isidro	64.2	20.2	12.0
Miraflores	56.6	24.5	14.4
La Molina	47.1	28.2	14.9
Surco	46.4	29.7	18.7

Finalmente, a diferencia de la tendencia “clasista de la votación de la izquierda y de la derecha, la del APRA se reparte entre los distintos sectores de la población. Si vemos cuáles son los distritos donde obtiene sus más altos porcentajes, se observa que dos son populares, uno de clase media baja y otro de clase media alta. Por lo demás, como ha podido observarse en los casos anteriores, es el APRA el que aparece disputándole a la izquierda y a la derecha su clientela “natural”, aun cuando lo haga con más éxito en los distritos populares, que en los de clase media alta. Esto puede estar indicando, al mismo tiempo que la naturaleza pluriclasista de los electores apristas, también una polarización conservadora de las clases altas, y la existencia de un voto más político entre ellas, a diferencia de una votación entre política y social en los sectores populares.

Distrito	APRA (%)	IU (%)	PPC (%)
Carabayllo	48.2	31.7	9.1
Chaclacayo	47.2	31.1	12.8
Chosica	45.0	14.9	19.7
Villa María	44.0	40.8	7.7

Por lo demás, esta politización, mayor en las clases altas y menor en los sectores populares, coincide, de alguna manera, con los comportamientos de las fuerzas organizadas de derecha e izquierda. Como vimos, si el PPC no logró una votación más alta no fue porque no hiciera su mayor esfuerzo, mientras que la IU obtuvo la segunda votación casi a pesar suyo.

Si bien las tendencias nacionales de la votación, que el caso de Lima reflejan bien, se han mantenido, hay municipios en los que, atendiendo a circunstancias locales, se han producido desplazamientos sorpresivos de la votación electoral. Así, la IU aparece ganando las elecciones en Ica, capital del departamento costeño del mismo nombre, bastión tradicional del APRA, debido a la ineficiente y corrupta gestión del concejo municipal anterior, de las filas de ese partido. En el municipio de Tacna, al sur peruanano, gana el PPC, derrotando al APRA y la IU debido al apoyo que uno de los grupos de ésta dio al candidato conservador para

impedir la victoria de su opositor interno dentro de la coalición izquierdista. Igualmente es importante el hecho de que el APRA gane, por primera vez en su historia, municipios como el de las andinas ciudades de Puno y Cuzco, hasta entonces en manos de la izquierda, victorias obtenidas con un importante voto campesino, precisamente allí donde Sendero Luminoso ha querido asentarse en los últimos tiempos.

Resultan igualmente reveladoras las cifras electorales obtenidas en los departamentos declarados como zonas de emergencia, aquellos donde la violencia política que ejecutan a duo Sendero Luminoso y el Ejército se ha desarrollado más ampliamente, provocando las migraciones de poblaciones enteras a otros centros urbanos en busca de la paz.

En tres distritos del departamento de Ayacucho, Acrocos, Vinchos y Soccos, las boletas anuladas y en blanco exceden el 66% de la votación total, lo que según la legislación vigente, motiva la anulación de esas elecciones. Se trata, sin duda, de una evidente muestra de aquiescencia activa al senderismo, pues si bien se revela la incapacidad militar de éste para promover el boicot electoral —objetivo que viene persiguiendo desde que en mayo de 1980 inició sus acciones quemando las ánforas en el distrito de Chucchis, y también en Ayacucho—, la desestimación de un aspecto tan amplio de fuerzas políticas a través de los votos anulados o en blanco sólo puede ser entendida como algún grado de simpatía por SL.⁴

En menor proporción, ocurre lo mismo en Huamanga, la capital de Ayacucho. Aquí los votos nulos y en blanco llegan al 30%, superando ampliamente el promedio nacional, aunque quedando por debajo de los votos válidos emitidos en favor de las fuerzas políticas que participan del sistema electoral. En Huamanga la alcaldía provincial fue ganada por Izquierda Unida.

No ocurre lo mismo en los departamentos de Huacavelica y Apurímac. Aquí los votos nulos y blancos superan escasamente el promedio nacional; en cambio, la abstención electoral bordea en ambos casos el 50%, mientras el promedio nacional oscila entre el 10 y el 12%. Aunque una primera impresión podría suponer la existencia de una respuesta activa a la consigna senderista de boicotear las elecciones, deben señalarse las dificultades que sus acciones armadas han encontrado para seguir desa-

⁴ El promedio nacional de votos nulos y blancos es del orden del 5 por ciento.

rrollándose en esta zona. Parecería, más bien, que la alta tasa de abstención es resultado de las acciones punitivas de Sendero Luminoso en 1985 contra todos aquellos campesinos que mostraban el dedo índice pintado con la tinta indeleble con la que se garantiza la no duplicación del voto. Entonces, SL castigó a los campesinos que habían votado cortándoles el dedo. En estos casos se trataría más bien de una cierta hegemonía negativa, es decir, la creación de un consenso basado en la fuerza y en el temor que ésta inspira. A su manera, Sendero Luminoso también se ha hecho presente en las cifras electorales.

Algunas conclusiones

La victoria aprista en la mayoría de los municipios del país, al mismo tiempo que la reducción de su votación nacional, sumada a las enconadas denuncias de fraude que la oposición de derecha y de izquierda levantaran apenas concluidas las elecciones, ha producido una situación en la cual, mientras más aprista se vuelve el Estado, menos aprista se vuelve la sociedad. Aunque jamás se probará la existencia de fraude electoral, y es bastante verosímil que éste no existiera, el APRA, sin embargo, rompió determinadas tradiciones políticas que, si bien recientes, no por ello son menos legítimas ante la opinión media nacional. Así, la intervención presidencial en la campaña electoral, la propaganda realizada fuera de los plazos permitidos y la intervención abierta del Estado en favor del partido del gobierno, si bien no explican la alta votación obtenida por el APRA, sí han predis puesto a amplios sectores de la población, tanto los populares como los medios y altos, a ser fáciles receptores de una prédica antiaprista.

Tanto para los sectores radicales de la izquierda, como para los de la derecha, la utilización del antiaprismo puede convertirse en un fácil recurso de agitación política que llene sus respectivos vacíos programáticos. Contrariamente a lo que piensa el radicalismo de izquierda, no es seguro que el antiaprismo devenga en apoyo a proyectos de izquierda. El encono contra el aprismo se incubó en el país en los años treinta, cuando el APRA surgía como la única fuerza organizada partidariamente y levantaba las banderas de lucha antioligárquica que le dieron la legitimidad de las masas. La derrota que la oligarquía peruana propinó al

APRA se logró no sólo con la represión, sino también con un conjunto de ideas que la población terminó admitiendo como verdaderas. Así, aprismo se identificó con estatismo, actividad partidaria con secta, los modos plebeyos del pueblo aprista fueron mirados con desdén aristocrático. La oposición de izquierda al APRA sólo se desarrolló cuando ésta ya se hallaba cooptada por el Estado oligárquico. La izquierda rechazó la gestión propatrimonial del sindicalismo aprista. Pero las formas culturales que entonces surgieron no se han extendido masivamente ni han logrado quitarle el sello oligárquico y aristocrático al sentimiento antiaaprísta que aún subyace en el inconsciente colectivo. La propia victoria de Alan García Pérez, y la afirmación de su liderazgo, ha cabalgado en una idea central: él no es como todos los apristas. La agitación del antiaprismo probablemente termine en el fortalecimiento de los aspectos autoritarios y oligárquicos presentes en la cultura política peruana y en las formas de razonamiento del sentido común popular.

Este clima, como es natural, ha hecho que la relación de fuerzas al interior de la Izquierda Unida se empiece a inclinar en favor de sus sectores más radicales, aquellos que promueven un enfrentamiento directo con el gobierno de García y que se ven tentados por la realización de acciones militares en competencia con el senderismo. Aunque el espectro de centro-izquierda que ha mantenido la estabilidad del régimen democrático se mantiene como corriente de opinión masiva, y eso expresan los resultados electorales, el Presidente de IU, Alfonso Barrantes, promotor de la línea moderada y de acercamiento con el APRA, ha resentido internamente su derrota en los comicios municipales de Lima. La permanente situación de crisis que ha vivido el agrupamiento de izquierda durante 1986 tiene su explicación en lo irreconciliable de las dos posiciones que hoy pugnan por dirigirlo. Luego de las elecciones municipales, sin embargo, ha empezado un desplazamiento de fuerzas internas que buscan terciar en el debate entre radicales y moderados, pero su destino es aún incierto. La ruptura de IU, acontecimiento nada improbable, afectaría severamente la existencia misma del régimen democrático-liberal, cuyo sostén básico ha sido el tácito entendimiento del centro con la izquierda.

Pero tampoco en el caso de las fuerzas de la derecha las cosas marchan viento en popa. La derrota del PPC, cuyo objetivo era agrupar un tercio de la votación nacional, el no aprista y no comu-

nista, lo descalifican en su pugna con Acción Popular por encabezar una coalición conservadora en las elecciones municipales de 1989 y en las nacionales de 1990. Al parecer, ante el acelerado desgaste de sus líderes históricos, la derecha deberá sufrir los traumáticos momentos de un recambio generacional, proceso ya sufrido por el APRA y resuelto por el liderazgo de García, proceso que se encuentra inconcluso en la izquierda. Su gran apuesta estriba en que la acción terrorista de los grupos armados continúe generando la conservadurización de los sectores medios y altos, y que se extienda luego a la sociedad, esforzándose por identificar paz con orden, y orden con autoritarismo conservador.

A pesar de que el APRA ha ganado las elecciones municipales, y esto redundará en un fortalecimiento de la autonomía e iniciativa del gobierno de García Pérez, la creciente ola de violencia que ha vuelto a desplegarse sobre el país luego de noviembre último, ha recordado que sólo una amplia concertación de fuerzas políticas por el cambio logrará afirmar en definitiva el régimen democrático, sorteando el destino conosureño de los años sesenta.

Cualquiera de los proyectos políticos en pugna, desde el senderismo hasta la propuesta más conservadora, tiene el apoyo social suficiente como para mantenerse por largo plazo en la pugna por imponerse. Tal es la desestructuración social y regional del Perú de hoy. Pero el problema real es otro: ¿cuáles de esos múltiples proyectos con mayor o menor respaldo social tienen la capacidad de ponerse de acuerdo en lo que podrían ser las bases modernas del Estado peruano, haciendo posible así no sólo su persistencia, sino la existencia plena de Perú como nación? Esta es la verdadera carencia de la política peruana y sus partidos. Es lo que explica que la inmensa necesidad de nuevas creencias que se observa entre los peruanos no haya sido satisfecha, y que las interpellaciones ideológicas que emiten los partidos políticos sólo sean capaces de existir en plazos muy cortos. Por eso, quizás, visto desde Perú, el siglo XXI aparece tan incierto.